

Cucillos en un nido de gorrión: espacio municipal y poder local en Altamira, Tamaulipas*

*Marielle Pepin-Lehalleur
Marie-France Prévôt-Schapira*

PARA LLEGAR A ALTAMIRA se recomienda sin asomo de duda entrar por el extremo noroeste del municipio, por la carretera que acompaña al ferrocarril en sus rectilíneos 70 kilómetros. Uno observa una agricultura en expansión que dominan grandes empresas tecnificadas ligadas a los mercados más dinámicos. También, en menor superficie, a una treintena de ejidos, productivos y bien organizados unos, deprimidos y sin grandes recursos los demás.

Arribar a Altamira desde Tampico ofrece un panorama opuesto. Allí la agricultura se retiró ante el avance de las petroquímicas, del puerto industrial y de las colonias populares que se multiplican en el antiguo espacio de ejidos y ranchos, prolongando la periferia de su gran vecina.

Estos fenómenos, comunes pero generalmente disociados, se conjuntan en Altamira. Ocupan en estrecha vecindad lo que fue territorio de una villa comerciante próspera y apacible del Nuevo Santander colonial, mantenida después a la sombra del puerto de Tampico que sus propios habitantes tomaron la iniciativa de (re)poblar (1823), y dedicada a la crianza ganadera en fuerte interacción con la Huasteca veracruzana.

El municipio debe administrar la coexistencia de una larga evolución hacia la intensificación agrícola y de una brusca mutación industrial, vincular a la cabecera una población rural dispersa en ejidos y rancherías, lidiar con las industrias y los organismos federales que ope-

* Por razones de espacio *ES* hizo pequeños cortes editoriales.

ran en su territorio y resolver las carencias urbanas de las nuevas colonias que crecen de manera acelerada. Estas exigencias son retos nuevos para una sociedad y una clase social que se habían limitado a contender dentro de sus propios límites y enfrentan ahora problemáticas heterogéneas que remiten a universos diferentes.

A mediados de los años cincuenta, Altamira ingresó al ámbito petrolero con la explotación del Campo Tamaulipas, en las inmediaciones del poblado. Al poco tiempo, empresas de petroquímica secundaria aprovechaban la cercanía al puerto de Tampico y al complejo de Ciudad Madero para radicarse en colindancia con los tres municipios, sobre y entre terrenos de ejidos de Altamira (Miramar, Francisco I. Madero, Laguna de la Puerta). Las implantaciones sucesivas conformaron lo que se llama ahora el "corredor industrial", en medio de núcleos de población que van extendiéndose unos, creándose otros, de manera explosiva. La construcción del puerto industrial de Altamira en 1979 generó aún mayores expectativas y sigue atrayendo a migrantes hacia el conjunto de la conurbación. Muchos probaron suerte en barrios del centro y en otras periferias antes de poblar las colonias aún sin urbanizar de Altamira.

Hoy se deja sentir el peso, en tiempo diferido, de los megaproyectos iniciados antes del derrumbe financiero de 1982; el arrastre económico, tardíamente, apenas despunta, mientras el aflujo poblacional sigue ampliándose. Pero la restricción de las inversiones, la menor intervención gubernamental y un drástico cambio en el "sólido sur" tamaulipeco del sindicato petrolero han excluido o aplazado las soluciones ideadas por los organismos planificadores pensando en el conjunto de la conurbación Tampico-Ciudad Madero-Altamira. Son ahora las autoridades locales las encargadas de enfrentar las demandas de una población que ha acudido a la zona para tomar su parte en la activación económica anunciada.

El ambicioso plan de ordenamiento de la zona conurbada de la desembocadura del río Pánuco buscaba racionalizar los hechos consumados e imponer cierta dirección a los desarrollos futuros. Desatentos a sus previsiones, el poblamiento y la concentración industrial se localizaron de acuerdo con las lógicas a veces contradictorias de los actores, obligando al equipo municipal altamirense a hacer obra gestiona-ria en rumbos bastante incómodos. ¿Cómo se definen prioridades cuando se conjugan intereses tan dispares y cuál es la arena en que se miden fuerzas? ¿Cuáles son los recursos de la política frente a contendientes tan poderosos? ¿Hasta dónde define la gestión administrativa de un municipio los contornos de un poder local? (Abelés, 1986; Rinaudo, 1986; Pérez, 1991) ¿Tiene algún sentido la concepción misma de una realidad local, a

la vez reflejo y actor de las vivencias y expresiones de una sociedad singular?¹

1. Afianzamiento del sector ejidal e intensificación agrícola

El centro de gravedad de las actividades de Altamira se desplazó hacia el extremo sur del municipio, donde topa con Tampico y Ciudad Madero, pero durante dos siglos² su vasto territorio se aprovechó en forma más pareja a la vez que extensiva, a partir del largo camino que lo atravesaba rumbo a Aguayo (hoy Ciudad Victoria) y Monterrey hacia el noroeste. Grandes rebaños de ganado mayor se distribuían en una serie de haciendas de regulares dimensiones, y varios poblados y rancherías se diseminaban a lo largo del camino y prosperaban, como Lomas del Real, gracias al comercio de la sal y del pescado que sacaban de las lagunas costeras de San Andrés y de Las Marismas. Altamira era sitio comercial activo, y en su Plaza de los Arrieros se juntaban las caravanas de la ruta del sur, uniendo Tamaulipas y la Huasteca veracruzana, y las que salían hacia San Luis Potosí o la región fronteriza.

Si el desarrollo de Tampico y el ferrocarril entre el puerto y Monterrey (1890) coartaron la primitiva importancia del centro urbano de Altamira, favorecieron en cambio cierta intensificación de la ganadería y de la producción hortícola en las tierras húmedas cercanas a las lagunas del Tamesí.

El auge petrolero en el decenio de los veinte incrementó la demanda de productos alimenticios, a la vez que atraía a inversionistas y agricultores extranjeros, estadounidenses, chinos y europeos. Aunque la vocación agrícola de Altamira se reveló con amplitud en tiempos más recientes, algunas de estas familias de agricultores, modestamente instaladas entonces, ya iban introduciendo adelantos técnicos y desarrollando empresas que dan hoy gran relevancia a la producción local.

¹ La información básica con la que elaboramos este artículo proviene de numerosas entrevistas y recorridos realizados en tres periodos de trabajo de campo: agosto de 1989, octubre de 1990 y julio-agosto de 1991. Agradecemos a todas las personas que aceptaron recibirnos en sus casas, oficinas, tiendas o ranchos y nos ofrecieron sus conocimientos de la historia y el quehacer local, además de compartir con nosotras, en más de una ocasión, algo de sus vivencias personales. Expresamos también nuestro agradecimiento a Viviane Brachet-Márquez y a Carlos Roces por sus numerosas acotaciones y sugerencias, las que recogimos hasta donde nos fue posible en la última versión de este texto.

² La Villa de Nuestra Señora de las Caldas de Altamira fue fundada por José de Escandón el 2 de mayo de 1749.

Vale decir que los propietarios y productores medianos y grandes, mexicanos o de origen extranjero, radicaban en Tampico y pertenecían a su sociedad. Para ésta, Altamira era simplemente "el campo" de la ciudad; no se reparaba en límites de jurisdicción ni se concedía mayor peso a las autoridades locales (Prévôt-Schapira, 1990).

En este contexto, las dotaciones agrarias iniciadas en 1925 reforzaron los lazos entre la cabecera de Altamira y su población rural y dieron más realidad a la unidad municipal.

Nacimiento paralelo de ejidos y granjas agrícolas

Como en las otras poblaciones de Tamaulipas, el proceso agrario se inicia en la gubernatura de Emilio Portes Gil (1924-1928).³ Se forman los primeros ejidos en posesión provisional sobre el Tamesí y a lo largo del doble eje carretero-ferrocarrilero. Las dotaciones benefician a la población local de jornaleros, vaqueros, arrieros y pescadores, a la que se suman los trabajadores migratorios que proceden de las huastecas veracruzana y potosina (Romer, 1986). Una actividad de fuerte empuje entonces es la explotación de las salinas que exige en primavera gran cantidad de cosecheros y de cargadores para acarrear la sal de los campos de secado hacia la bodega y el tren.

Las dotaciones arraigan a la población trabajadora y proporcionan un modelo organizativo que rebasa la producción; apoyado por el poder estatal, el sector ejidal de Altamira va haciéndose cargo de los asuntos municipales a la vez que de la problemática agraria, cobra nuevos bríos desde 1933 y enmarca estrechamente la vida local en el acontecer político regional y nacional. La organización obrera se inicia en la misma fecha con el Sindicato de Trabajadores en Transporte Terrestre (cargueiros), fuertemente vinculado al mundo sindical tampiqueño.

La agitación agraria que caracteriza la llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia se manifiesta en Altamira con una agudización de los conflictos entre solicitantes y terratenientes locales o de Tampico; llega a su cúspide en 1935, cuando dos dirigentes municipales agraristas mueren asesinados en el cine Independencia, de Tampico. Doce ejidos consiguen formarse, principalmente en el centro y el sur del municipio, a un

³ Se trata de Cues de Palmas Altas, Estación Miramar, Columbus-Cauhtémoc, Armenta y Cervantes. Con la participación de la Liga de Comunidades Agrarias, fuertemente impulsada por el gobernador y el ingeniero Marte R. Gómez (presidente de la Comisión Local Agraria y jefe del Departamento de Fomento), se constituye una Sociedad Local de Crédito Agrícola en Miramar para adquirir aperos de labranza (Portes Gil, 1972:188-202). Al año, Francisco I. Madero también se constituye en ejido.

lado de la carretera o en la laguna Champayán.⁴ Poco después se formarán los ejidos en la ribera más occidental de las lagunas, siendo posteriores los nuevos centros de población del norte del municipio, ganaderos y dotados en forma colectiva.

Con todo, la superficie ejidal es minoritaria en el municipio y suma poco más de 33 000 ha para 2 243 beneficiarios, mientras los propietarios privados disponen de 89 000 ha.⁵ Un rasgo que ayuda a explicar esta proporción, contrastante con las regiones vecinas del Mante o del Pujal-Coy, radica en el aprovechamiento agrícola temprano que se da a estas tierras.

En efecto, las expropiaciones agrarias afectan a los latifundios ganaderos. En cambio, la agricultura se desarrolla en superficies más pequeñas, intensivamente cultivadas, donde junto al maíz predominan las legumbres, como tomate, cebolla, chile, repollo. Los intermediarios habilitan la producción sin reparar en la tenencia.

Los agricultores privados de aquellos tiempos son muy cosmopolitas. Grupos e individuos confluyen en Altamira en circunstancias diversas. Numerosos chinos se internan al país al final del siglo pasado para participar en la construcción del ferrocarril o seguir sus rutas. En Altamira, se establecen cerca de las estaciones y siembran arroz o verduras que envían a Tampico a las tiendas de sus familiares organizadas en amplias sociedades cooperativas.

La presencia de estadounidenses en Tampico y en el sur de Tamaulipas, aun anterior, es constante en el siglo XIX, alimentada por sueños de origen francés que escapan ante el avance yanqui durante la Guerra de Secesión (Sánchez, 1990:254) y por comerciantes, viajeros, o colonos agrícolas ligados a las compañías deslindadoras del porfiriato (Blalock Co. en Ocampo). Se recrudece la inmigración con el auge petrolero del decenio 1915-1925 y por esos años arriban también europeos que huyen de la guerra. El flujo se mantendrá con el acicate de la crisis de 1929, hasta el repunte agrarista de los últimos años treinta.

De 1922 a 1924 el fraccionamiento de la hacienda de El Cojo, promovido en Texas, atrae a colonos estadounidenses que inician el cultivo de legumbres alrededor de Estación Manuel, que colinda con el municipio de Altamira (Pérez, 1990). En las haciendas cercanas de El Chocoy y de La Palma, en Columbus, en Santa Gertrudis, en Los Esteros, en

⁴ Por orden de registro en la Secretaría de la Reforma Agraria: Santa Juana, Torno Largo, El Fuerte, Francisco Medrano, Tres de Mayo, Aquiles Serdán, Benito Juárez, Mata del Abra, Laguna de la Puerta, Buenos Aires, Ricardo Flores Magón, Altamira.

⁵ Padrón de productores de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), 1989.

Estación Colonias, se van parcelando tierras en lotes de 100 ha que se dan en renta o en venta. Allí también siembran verduras y algodón. Son preferidas las tierras cercanas al ferrocarril para embarcar la producción, y la franja suroeste que bordea las lagunas, entonces muy bien comunicada por lancha.

Gracias a sus conexiones comerciales extrarregionales, Altamira escapa en cierta medida al decaimiento de la economía de Tampico-Madero después de la expropiación petrolera de 1938 y de la reorganización territorial de la producción que posteriormente emprende Petróleos Mexicanos (Pemex).

A la agricultura y a la producción salina de Lomas del Real (donde trabajan 500 personas en 1950 [Meade, 1977: t. III:17]), puntales de la actividad local, se suma la ganadería, restringida ahora en superficie, pero que finca su desarrollo en el mejoramiento de razas y de pastos: datos de 1940 señalan 25% de ganado cebú y 25% de razas europeas en el hato altamirense (Meade, 1977, 1. III:19).

Estimulada por la cercanía de la ciudad, la pequeña burguesía asentada en la cabecera de Altamira emprende actividades comerciales y de servicios que la apartan de sus orígenes campesinos. Se siente cada vez menos representada por los ejidatarios que se suceden en el ayuntamiento y no comparten sus afanes de urbanización. Éstos detentan un papel político que supera en mucho su importancia económica y refleja sobre todo la influencia del antiguo gobernador de Tamaulipas y presidente de la República, Portes Gil. Así, durante 20 años, el sector ejidal encabezado por el "cacique" Soto Mata conservará el poder hasta 1947, cuando los adversarios de todo el estado logran la desaparición de poderes en Ciudad Victoria. La población del centro urbano de Altamira aprovecha esta situación y pide el desconocimiento del equipo municipal y su sustitución por una Junta de Administración Civil. Los sectores campesinos y popular seguirán alternándose en el ayuntamiento durante 15 años. En ese lapso, fuerzas económicas extrañas al municipio encontrarán allí terreno propicio para su desarrollo, pero no se preocuparán por la política local.

Hacia la diferenciación del territorio agrícola

El brusco desarrollo del cultivo algodonero de 1961 a 1970 a todos sorprendió, aun cuando se practicaba de tiempo atrás y algunos agricultores probaban variedades y fechas de siembra de manera sistemática desde 1952. En esta zona, donde se cultiva el algodón con las solas aguas del temporal, la baja incidencia de plagas en tierras nuevas no irrigadas abarata los costos de producción, compensando con creces los rendimientos

menores.⁶ La caída del algodón en los distritos de riego del río Bravo precipitó su expansión en el sur de Tamaulipas y en el margen derecho del Tamesí.

Se desmontó hacia el norte del municipio y se amplió la red de brechas. Inversionistas, agricultores y braceros acudieron de la frontera y allende, de La Laguna, de Nuevo León y la Huasteca. Localmente participaron los productores, ejidatarios o privados, llegándose a sembrar cerca de la mitad de la superficie agrícola, unas 20 000 hectáreas.⁷

Decenas de despepitadoras beneficiaban el algodón de la región antes de enviarlo hacia Tampico o Monterrey para su exportación. En Altamira, los despepites se agrupan alrededor de Estación Cuauhtémoc, convirtiendo al poblado en la "cabecera" agrícola del municipio, lo que sigue siendo hasta hoy. Acogía entonces, en condiciones de extrema precariedad, una población flotante que alcanzaba, según dicen, 100 000 personas en tiempo de pizca. A partir de 1965, ciclones, sequías y lluvias a destiempo se sucedieron año tras año. En un contexto nacional de crisis agrícola, el descenso del precio y, sobre todo, el desarrollo incontrolado de las plagas, acabaron por aniquilar el cultivo. En los años 1968 a 1970 la región entró en quiebra. No había comprador para las tierras que sus dueños endeudados ofrecían a cualquier precio. Los tractores se vendían en 5 000 y 10 000 pesos.

Gran parte de las casas algodoneras y de los agricultores atraídos por la bonanza se retiraron, pero la generación de productores locales que conocieron aquel auge y que después de la quiebra volvieron a empezar, quedó marcada por la experiencia. Sin dejar de vigilar los movimientos del mercado y de cuidar sus ligas con empresas agroquímicas o comercializadoras, los agricultores privados se mostrarían, en los años venideros, dispuestos a acogerse a los programas estatales y a participar activamente en el juego institucional y asociativo. Para los ejidatarios, las medidas de reactivación agrícola que se establecieron entonces en escala nacional vinieron a colmar un vacío y ofrecerles amparo a la vez que les imponía su tutela.

Para la economía local, un impulso externo cobraba aún mayor urgencia al coincidir la crisis algodонера con problemas laborales en las salinas. En 1969, un largo conflicto entre el concesionario y el Sindicato

⁶ En aquellos años se producían 1.8 toneladas de algodón hueso por hectárea (dando 2.7 pacas), a un costo de entre 2 000 y 2 600 pesos en vez de 4 000 a 8 000 en zonas de riego (Sistema Bancomer, 1967:29).

⁷ El padrón de productores de la SARH 1989 señala 38 500 ha agrícolas en total, de las cuales 6 500 son de riego. De éstas, 30 300, incluyendo casi 6 000 de riego, están en manos privadas. Los ejidatarios tienen 8 100 ha agrícolas, incluyendo 650 de riego.

de Terrestres, que defendía a los cargueros de la sal, golpea duramente esta actividad; en Altamira se crean tres cooperativas, pero la producción no se recupera del todo antes de la expropiación de la laguna Las Marismas en 1979 para construir el puerto industrial.

A pesar del desastre, muy rápidamente, a partir de 1971, la agricultura local conoce un nuevo arranque, con la siembra de granos para consumo animal y humano y de oleaginosas. Ésta se ve favorecida por la política agrícola nacional que busca satisfacer una demanda urbana de alimentos en constante crecimiento. Se empieza a producir soya y a sembrar cártamo y frijol negro en el ciclo de invierno. El sorgo, ya experimentado en los años sesenta, recibe cierto impulso oficial pero, al igual que el maíz, disminuye casi a punto de desaparecer en los años ochenta, sustituido por la soya, adaptada a la humedad de estas tierras.

La expansión de los granos se da en toda la región sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz y San Luis Potosí, reunidas en el gran programa agropecuario de la Cuenca del Bajo Pánuco que incluye la creación del Centro Experimental Agrícola de las Huastecas en Estación Cuauhtémoc. En Altamira, la superficie de granos alcanza de 15 a 20 000 hectáreas, sembradas en dos ciclos, con lluvias de temporal y humedad residual, y alrededor de 3 000 bajo riego, superficie similar a la que se sembraba anteriormente de algodón. Tanto propietarios como ejidatarios se vuelcan a la producción de granos. Una de sus ventajas, aparte del apoyo del gobierno de Tamaulipas y de la Federación, es la poca necesidad de mano de obra en un periodo en que ésta se hallaba ocupada en la construcción del corredor industrial de Altamira (años setenta) y el puerto industrial (1979-1982). La fuerte intervención del Estado en los aspectos crediticios, técnicos y organizativos de la producción no afecta el ámbito de la comercialización que, rasgo notorio y duradero de la agricultura de la región, seguirá siendo privada. Por cierto, la búsqueda de mejores condiciones de venta es un tema capaz de reunir a productores privados y ejidatarios en la Unión Regional de Comercialización del Sur de Tamaulipas. Con sede en Ciudad Mante, la Unión encabeza las comitivas ante las instancias oficiales a la vez que negocia contratos de venta con las empresas agroindustriales.

La producción de hortalizas se resintió al inicio de la expansión de los granos pero tiene desde entonces un gran auge. En ella, la participación ejidal es minoritaria. Sólo los bancos privados o nacionalizados y los *brokers* estadounidenses habilitan las hortalizas, aunque en el decenio pasado Joaquín Hernández Galicia, alias *la Quina*, líder del sindicato petrolero, financiaba a varios ejidos de Altamira para surtir su cadena de tiendas de consumo.

El producto principal es la cebolla para exportación y consumo na-

cional. Le siguen el chile verde y el tomate (rojo), la sandía y el melón. También se hacen intentos con bombó, *sweet corn*, tomate cherry, pepino, etc. Las superficies, variables de un ciclo a otro según los precios, tributarios a su vez de la demanda en Estados Unidos y de la capacidad de los productores de ese país de satisfacerla, oscilan alrededor de 4 000 ha en total.⁸

Los agricultores se empeñan en enterarse de técnicas de punta en las revistas especializadas, como la que un grupo de agricultores de la región publica en Tampico (*Agromundo*), o aprovechando sus viajes y contactos comerciales en Estados Unidos. Todos están al acecho de productos nuevos que puedan tener mercado en ese país, pero una relación directa con las cadenas agroalimentarias les es casi vedada y dependen de los introductores comerciales.

Desde 1984 reaparece el algodón, en manos de los productores privados que buscan asociarse y poner sus propias despepitadoras para atemperar lo riesgoso de este cultivo. Las superficies se incrementan y llegan a 5 000 ha en 1991.

La agricultura altamirense parece haber llegado a cierta estabilización en cuanto a los usos más contrastados del suelo. Fuera del ángulo suroeste, donde se asientan los pozos petroleros, la industria y la población urbana, que cubren aproximadamente 7 500 ha, todas las tierras del municipio se prestan a la producción agropecuaria.

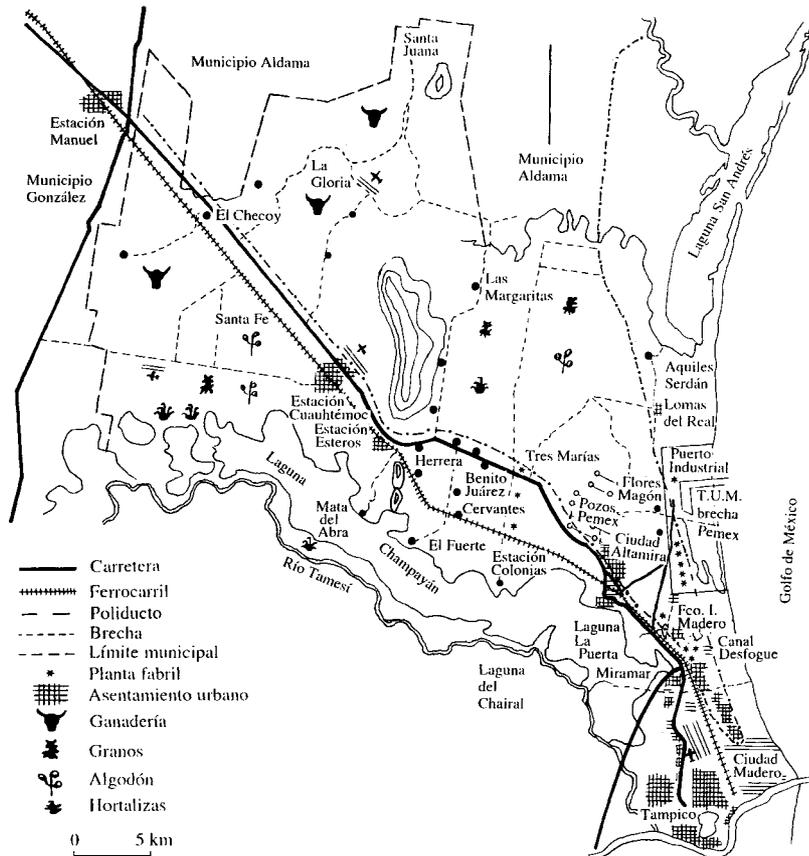
Como se puede ver en el mapa, en las vastas superficies planas al norte del poblado de Altamira tienden a predominar los granos, y las hortalizas en la franja que bordea las lagunas del Tamesí hasta llegar al municipio de González. En las tierras atravesadas por la carretera y el ferrocarril es un poco mayor la pendiente y mejor el drenaje. La categoría social del productor, más que la aptitud del terreno, es la que determina el tipo de producto, pues la topografía y las capas freáticas cercanas permiten instalar sistemas de riego si se cuenta con los recursos financieros.

Es probable que la firma de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá flexibilice aún más la estructura productiva agrícola. Será más directo el efecto del mercado estadounidense en la rentabilidad de cada producto, y las tierras mismas podrían entrar, por compra o renta, en las estrategias de los agricultores del país vecino.

Las condiciones naturales son más restrictivas en los suaves lomeríos cercanos al mar y hacia la porción noroeste del municipio, de ambos

⁸ Según datos del Distrito de Desarrollo Rural 162 de la SARH que cubren los años 1978 a 1988 y tienden, en opinión de los productores, a subevaluar las superficies.

Municipio de Altamira, Tamaulipas



lados de la carretera, donde ondulaciones del relieve prefiguran un acercamiento a la sierra Tamaholipa. La ganadería se practica allí por falta de mejor opción. Después de las sucesivas reducciones de su superficie (un poco superior a la agrícola, con 55 000 ha, de las que 49 000 están en tenencia privada), la actividad recobró importancia en los años setenta y crece junto con los ingresos petroleros. Era de muy buen tono adquirir un rancho entonces, y presumir de la fina estampa de sus animales.

La crisis financiera ha dado al traste con este abultamiento de la ganadería y ésta se desarrolla ahora sobre bases más profesionales, donde se busca rendimiento, en carne o leche. Hay un gran esfuerzo por

mejorar el material genético y los ganaderos introducen razas europeas para cruzarlas con cebú (incluso unos pocos realizan la transferencia de embriones), o aclimatarlas (una técnica muy delicada). Siembran diversos pastos y, aunque es zona de esquilmos, algunos experimentan con complementos. Para los ganaderos privados —los ejidos pecuarios están menos equipados— “el Tratado de Libre Comercio ya se firmó”, y se busca la especialización y una mayor competitividad en la cría.

Horizontes políticos de la agricultura

Agricultura y ganadería representan dos actividades de gran empuje y arraigo, con fuertes inversiones en infraestructura y en sistemas de acopio y comercialización, con la buena dosis de esperanza e incertidumbre que le dan su ubicación geográfica y su vocación exportadora. Desde luego, varían las apreciaciones que los productores hacen de su propia situación y las estrategias que se vislumbran.

Más allá del afán técnico que a todos caracteriza, un punto nodal de las divergencias parece ser la poca o mucha importancia que se le concede al compromiso asociativo, a la unión voluntaria para realizar gestiones, a instrumentar programas de interés común y a buscar un reconocimiento colectivo.

Las decisiones gubernamentales no son ajenas a este desconcierto pues se quitó a las asociaciones agrícolas y ganaderas muchas funciones que tenían en los sexenios pasados,⁹ y que les daban una presencia y un poder ineludibles frente a sus agremiados y en la zona. Ahora los productores deben realizar individualmente sus trámites, mientras que responsabilidades financieras que antes asumía la SARH se les han “devuelto” a las asociaciones y comités de usuarios: investigación agrícola, difusión tecnológica, combate de plagas, control sanitario para el traslado de productos de un estado a otro. Muchos quisieran desentenderse de estas operaciones que elevan las cuotas de inscripción y no siempre reditúan un beneficio inmediato, y varios, entre los más fuertes, opinan que pueden valerse por sí mismos a un menor costo.

Pero las asociaciones desempeñaban además un papel más político, cuando simbolizaban la consolidación en un bloque de los productores privados frente al gobierno y al sector social, llámese ejidal o sindical. La articulación vertical del sistema corporativo, junto con la fuerte cen-

⁹ Otorgar el certificado de origen, controlar la guía fitosanitaria, negociar cuotas de crédito y salarios mínimos en el Comité Directivo del Distrito SARH, representar a los productores ante la aduana y tratar con los *brokers*, contar con la dirigencia nacional de su confederación para concertar precios con el gobierno.

de trabajadores estacionales inmigrantes. El salario mínimo es de 11 000 pesos diarios, pero en la cosecha el pago a destajo es más común y se puede ganar alrededor de 30 000 pesos diarios en ciertas faenas (1991).

Desde luego, muchos ejidos siguen produciendo y alcanzan cierta prosperidad. Según el cultivo, el Banrural, los vendedores de insumos o los bodegueros les proporcionan crédito, y dos ejidos (Mata de Abra y Cuauhtémoc) disponen de riego. Varios ejidos ganaderos sacan buenos ingresos de sus actividades, trabajando solos o a medias.

Estos ejidatarios guardan poco en común con los que han cedido su tierra y son ahora jornaleros o albañiles, y esto les resta fuerza ante el municipio para realizar obras o introducir servicios. Otro factor que reduce la presencia del grupo ejidal productor es el distanciamiento, cuando no la pugna, entre la Unión de Ejidos, hoy muy menguada, y el ayuntamiento, acusado de mantener al Comité Municipal Campesino bajo su dependencia. La Unión busca dar nuevos usos a sus bodegas e instalaciones (concesión de Fertimex) y desempeñar un papel de intermediario en los programas de apoyo federal (como el Programa Nacional de Solidaridad, Pronasol) y estatal (Kilo por Kilo) a los campesinos pobres. Pero es fuerte la competencia por controlar estos canales que cobran cada día un papel más estratégico.

Más definitiva aparece la ruptura entre los ejidos agrícolas y los que pierden su superficie en beneficio de las fábricas y las colonias nuevas. El avance urbano-industrial se dio en orden disperso, con una fuerte aceleración en los años setenta y a ritmo de avalancha desde finales de los ochenta.

Pemex encabezó el movimiento al explotar los campos Tamaulipas y Constitución desde 1955, sobre parte de los ejidos Altamira, Santa Amalia y Flores Magón, con los que celebra contratos de arrendamiento. La faja de 4 000 ha que ocupa de laguna a mar en las inmediaciones de la cabecera segmenta el *continuum* agropastoral, delimitando las que llegarán a ser casi dos entidades ajenas dentro del municipio. Pronto siguió la empresa petroquímica Du Pont de Nemours. Después de la gran inundación de 1955 en Tampico, buscó los terrenos más elevados del ejido Miramar, entrando en operación en 1959 con el nombre de Pigmentos y Productos Químicos (PPQ). Primera fábrica plantada en tierras del municipio, con sus tuberías, condensadores y perpetuas emisiones de humos y vapores, la Dupont ya es parte del entorno familiar de la gente de Altamira, lo que no impide litigios con sus vecinos por daños y riesgos ecológicos. En los años siguientes, las plantas de Hules Mexicanos (de la que Pemex es accionista) y Novaquim (de Cydsa y Uniroyal), y más adelante la de Petrocel (Grupo Alfa), se instalan en terrenos contiguos o cercanos. Inician la producción en 1967, 1971 y 1976, respectivamente.

Este primer bloque petroquímico se asienta sobre la triple paralela

de la carretera Tampico-Mante, el ferrocarril y el poliducto Madero-Monterrey. Encajado entre los cascos de los ejidos Miramar, Francisco I. Madero, Laguna de la Puerta y la Pedrera, determina la pronta transformación de sus terrenos agrícolas a urbanos, a la vez que ancla definitivamente la suerte industrial del extremo sur altamirense. Bodegas y empresas agroindustriales también aprecian las ventajas de esta ubicación: sobre terrenos de una empacadora de carne clausurada, se establecen la Maseca, Galletas Gamesa, Alimentos Balanceados y Elementos de Concreto.

Se puede hablar de un verdadero corredor industrial, y el gobernador de Tamaulipas (y ex alcalde de Tampico), Manuel A. Ravizé (1969-1975), las cúpulas empresariales del puerto y los ediles locales se esfuerzan por revivir viejos proyectos de desarrollo regional, desvirtuar una posible competencia de los vecinos veracruzanos de más allá del Tamesí e interesar a inversionistas. Esta vez la idea convence, pero la inversión no proviene de la región o del estado sino de Monterrey, la ciudad de México y el extranjero, y allí es donde se toman las decisiones.

A principios del decenio de los setenta, las instalaciones de Polycyd (Cydsa) y Negromex (Nafinsa) se brincan la "frontera" marcada por Pemex, comprando terrenos agrícolas al noroeste de Ciudad Altamira, cerca de la gran termoeléctrica de Tres Marías, recién construida. Operan desde 1981 y 1982. Ambas fábricas son molestos pero insoslayables lunares en los lineamientos de la Comisión de Conurbación creada en 1979, cuando la decisión de construir el puerto industrial en Altamira obliga a considerar, al fin, las necesidades de un ordenamiento territorial en toda la zona (Comisión, 1980:26).

El cambio de uso que el corredor industrial va induciendo en los terrenos ejidales no suscita entonces mayores conflictos entre la población aunque surgirán controversias sobre colindancias.¹⁰ Los inicios del proceso coinciden con el periodo de entusiasmo algodonerero y la ubicación de estos ejidos, menos propicia para el cultivo en grande, los favorece, en cambio, para desarrollar actividades de servicio. Se multiplican los empleos en la construcción aunque el Sindicato de Albañiles de Tampico conserva la exclusividad de los contratos sobre la zona, hasta el casco urbano de Altamira. Aumentan las necesidades de transporte de carga para productos agrícolas y materiales, y ahora es la Unión de Camioneros de Altamira, fundada por Alejandro Briones Pedraza a media-

¹⁰ Al solicitarse el proceso de expropiación del ejido Miramar para facilitar su completa urbanización, antiguos desacuerdos salen a la luz pública. La revista *Debate* de agosto de 1984 informa sobre las demandas de varios ejidatarios contra empresas y familias importantes de Tampico que, según ellos, ostentan títulos de propiedad falsos.

dos de los cincuenta para atender la demanda de Pemex, la que logra imponer su monopolio.

Esta figura importante de la vida local ilustra la trayectoria de muchos de sus coterráneos cuyo estatus ejidal servirá para lanzarse al comercio y otras pequeñas empresas de prestación de servicios. En cambio, el empleo industrial, controlado por sindicatos nacionales, resulta una opción limitada. El núcleo de los antiguos ejidatarios del sur del municipio, entre los primeros dotados, radicados muchos de ellos en la cabecera, integra así redes urbanas y se desvincula políticamente del sector campesino.

De 1960 a 1970, el centro urbano de Altamira crece muy rápido, de 2 620 a 6 053 habitantes, entre ellos varios cientos de trabajadores petroleros con sus familias. Sus actividades se vuelven propiamente urbanas: 13% de la población económicamente activa (PEA) se encuentra en el sector primario, 43% en la industria y 38% ofrece servicios (VIII y IX censos).

Mientras muchos ejidatarios impulsan otro modo de vida, la cohesión comunitaria se debilita en sus ejidos, y sus dirigentes pierden legitimidad. La retirada del orden ejidal es un atractivo más para los múltiples intereses que se ciernen sobre esta zona cuando el gobierno de José López Portillo escoge a Tampico-Altamira para construir uno de los cuatro puertos industriales previstos en el Plan Nacional de Desarrollo Industrial. Estamos en febrero de 1979.

El puerto industrial: una programación ejemplar y utópica

Si lo acontecido hasta entonces ya había afectado la fisonomía y el ritmo de Altamira, se trata ahora de la llegada masiva de nuevas inversiones, empleos, organismos y población. Un trastorno territorial y social, realidades y proyectos que suscitan los sueños más descabellados.

Todo (o casi) se hace ahora según planes elaborados por expertos. Consultar los documentos elaborados por las diferentes secretarías involucradas (Fourt, 1983; Lavin, 1983) y más aún, entrevistar a algún responsable de la Comisión de Conurbación de la Desembocadura del Río Pánuco o del Fondo Nacional para los Desarrollos Portuarios (Fondeport) muestra cómo la creación del puerto industrial se benefició con un esfuerzo de programación inaudito. Entramos a la era de la planeación de los polos de desarrollo, concretados en parques y puertos industriales.

De ahí al año 2000, estaba prevista la instalación de una planta fabril que haría del puerto industrial un polo de primera importancia, especializado en siderurgia y, en menor grado, petroquímica y transformación

agroindustrial. Sumando 315 000 millones de pesos de inversiones, 16 empresas preveían emplear a 12 000 personas de manera permanente y a 40 000 para la construcción (SCT, 1982, en Fourt, 1983:18).¹¹

El puerto construido en la laguna Las Marismas contaba según el diseño original, con dos dársenas de 4 km para que las industrias tuvieran, casi todas, su propio frente de agua y redujeran costos de embarque. Llamarlo puerto industrial no es gratuito e implica ciertas limitaciones. Se trataba de que no le hiciera competencia al de Tampico, dejando a éste la exclusividad del manejo de carga en general y a granel. En el caso de Altamira, éste se especializaría en las necesidades de sus propias industrias y en mover contenedores y vehículos.

Para asegurar esta complementariedad, y cortándole el paso al sindicato nacional de petroleros que insistía en influir en la elección del concesionario del manejo portuario, en 1989 las operaciones de carga y descarga finalmente se encomendaron al Gremio Único de Alijadores (GUA) de Tampico, de reconocido profesionalismo. No se atendió el intento de la sección altamirense del Sindicato Nacional de Alijadores de hacer valer derechos territoriales.

Los diseñadores de este macroyecto subrayaron la necesidad de vincularlo a la economía regional; para ello se pensó en un Parque de la Pequeña y Mediana Industria, sin muelles propios pero dentro del perímetro del puerto y con todos los servicios (energía, agua, escuela de ferrocarril, etc.). Circulan versiones diferentes sobre el origen y la finalidad de este parque. Mientras la Comisión de Conurbación lo presenta como parte del plan conjunto emanado de la decisión federal, fuentes locales atribuyen la iniciativa al gobierno del estado (Aguilar y Contreras, 1989:19). En todo caso, los empresarios de la región, con su clara inclinación comercial, intentan acceder a las convenientes instalaciones portuarias aun sin dedicar el espacio concedido a actividades estrictamente industriales. El conflicto larvado entre la Canacinfra de Tampico y el Fondeport ilustra cómo un proyecto de “gran visión” puede interferir con una racionalidad más local y de menores alcances.

Pertenece al mismo plan de ordenamiento la construcción de la presa Tamesí, diseñada para elevar la capacidad de retención de las lagunas de Champayán, regar tierras agrícolas y surtir de agua a la industria y las zonas urbanas —originando protestas entre agricultores amenazados en sus propiedades al igual que en el casco del ejido Francisco I. Madero,

¹¹ Para ponderar el efecto de esta demanda en el mercado del trabajo regional, considérese que la PEA estimada en 1980 era de 11 300 personas en Altamira, 20 800 en Ciudad Madero y 91 900 en Tampico (Fourt, 1983:11).

del que se expropia una parte por encontrarse sobre el trazo del futuro y aún hipotético canal de desfogue.

No podían faltar los parámetros demográficos en esta gran obra de anticipación: con proyecciones a partir de los censos generales de 1940 a 1970 se intenta evaluar la población que ya ha empezado a acudir a la conurbación y la Secretaría de Salubridad y Asistencia levanta un censo propio (Comisión, 1980:10). Según estos cálculos, el municipio de Altamira tenía entre 46 000 y 47 000 habitantes en 1979, con una tercera parte en zona urbana.¹²

En la cabecera, aplicando la hipótesis media de un crecimiento anual de 12%, se espera 51 000 habitantes en 1990 y 68 000 a partir de 1992, fecha señalada como tope deseado de crecimiento (Comisión, 1982:163).

De las 11 000 ha expropiadas en 1979-1982 para la reserva territorial del puerto, una quinta parte se destinará a crear una zona urbana con la infraestructura necesaria para la población desplazada y la inmigración esperada. El área señalada, casi despoblada, se extiende a ambos lados de la carretera y ocupa todo el espacio entre el primer conjunto de fábricas del corredor industrial y el casco urbano de Altamira. El nuevo distrito urbano-habitacional deberá acoger a 350 000 personas en el año 2000. Se encomienda su urbanización y administración a un organismo federal, Duport, que emprende las obras y pone en venta sus lotes, sin gran éxito.

La respuesta negativa de la población se enmarca en las circunstancias desastrosas que se abaten sobre el país a partir de 1982 y golpean duramente a la región al obligar a empresas y organismos a cancelar, suspender o retrasar obras. Más directamente resulta de un proceso local en el que la acelerada corriente migratoria, obedeciendo a su propio compás, sigue dirigiéndose hacia la zona conurbada en busca de un empleo. Las zonas céntricas y empobrecidas de Tampico, los barrios inundables, las colonias aún sin urbanizar en el norte de Tampico y de Ciudad Madero acogen a los recién llegados en condiciones difíciles pero sin trámites burocráticos.

La búsqueda de un espacio para vivir alcanza a la cabecera de Altamira y a los ejidos del corredor industrial: Miramar, Francisco I. Madero y Laguna de la Puerta se transforman en zona urbana sin que se pueda notar demarcación alguna entre ésta y los barrios del norte de la conurbación.

¹² El Censo General de Población de 1980 no confirmará estas cifras, pues sólo reconoce al municipio una población de 36 499 habitantes, aunque las estimaciones de la PEA total y desglosada por sector se aproximan mucho: según el Censo, 11 244 personas se distribuyen en proporciones de 29, 24 y 46 por ciento entre los tres sectores de la economía.

La crisis de 1982 aniquila o trastorna muchos proyectos de inversión. Si bien se concluye la primera etapa del puerto con la construcción del canal de acceso y de dos tramos de atraque de 250 metros, habrá que esperar hasta mediados de 1991 para que se inicie su prolongación. La terminal de usos múltiples y su grúa portacontenedores entran en operación en 1989. Las obras básicas de infraestructura —carretera de acceso al puerto, ferrocarril— prosiguen con lentitud pero llegan a término.

Las inversiones industriales son las más afectadas. El proyecto siderúrgico (Sidermex, Hylsa y Premexsa) que representaba más de 83% de las inversiones programadas (Lavín, 1983:126) es abandonado. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad suspenden sus proyectos y varias empresas menores rompen sus compromisos.

Otros grupos industriales, después de una pausa, concluyen sus instalaciones.¹³ Con estas nuevas fábricas, se confirma la vocación del puerto y se da empleo permanente, en la rama petroquímica, a 10 000 trabajadores.

La lentitud de la implantación fabril limita las operaciones del puerto, mayormente dedicado a embarcar automóviles (Volkswagen) y contenedores. Surgen proposiciones para sacarlo de una excesiva especialización, trasladarle el movimiento de carga general y hacerle compartir con Tampico el de graneles.¹⁴

La gente de Altamira acepta los retos y abraza los espejismos del proyecto del puerto industrial. Desposeída de parte de su entorno por empresas y organismos foráneos, debe responder a presiones de fuerzas económicas disparejas y amoldarse a sus cambios de ritmo. Pero si la industria y la vida ciudadana se asumieron como el destino manifiesto de la región, la población acepta muy mal que no se cumpla o se demoren las ventajas prometidas en compensación por los sufrimientos impuestos.

Así, a los ejidatarios expropiados por el puerto se les ofreció, con alguna suma de dinero, dos lotes “urbanos” y la perspectiva de un empleo industrial. Los lotes a menudo se encuentran en medio de campos abandonados que quizás en años sean alcanzados por la urbanización, y la crisis ha dificultado las oportunidades de trabajo. Buena parte de los terrenos expropiados no ha recibido aún el uso anunciado y algunos de sus antiguos poseedores amenazan con entablar trámites para que les sean devueltos.

¹³ En el caso de Primex, la primera fábrica en funcionamiento en el puerto (1983), seguida de Altaresín, Finacril, Hules Mexicanos, Papeles Económicos de Tamaulipas, Polimar y la Terminal Petroquímica de Altamira (Tepeal) que recibe y almacena los insumos de las cinco grandes plantas petroquímicas del corredor.

¹⁴ *El Sol de Tampico*, 21-VII-91, artículo sin firma.

Casi inversa es la situación para las autoridades municipales. Conforme se inflaba el proyecto regional, perdían la legítima conducción de muchos de los procesos que se desarrollaban en su jurisdicción. Más allá del puerto industrial, cuya gestión escapa naturalmente a un municipio, el plan de ordenamiento de la zona conurbada segregaba el extremo sureño del municipio para integrarlo a las colonias del norte de Tampico. La creación del distrito habitacional de Duport reforzaba una vinculación ya iniciada con anterioridad, al imponer una ruptura física entre los ejidos en vías de colonización y su cabecera. Y el plan municipal de desarrollo urbano de 1982, desglosando las recomendaciones emitidas al nivel superior, sólo fijaba al ayuntamiento tareas estrictamente limitadas a la cabecera y a las colonias que surgían en las tierras contiguas del ejido Altamira (Comisión, 1982:58-60). Para constituir una nueva entidad conforme al proyecto industrial, se requería desmembrar al municipio. De no haber sido por la crisis, el poder municipal sin duda hubiera perdido mucho terreno.

Comodín en el juego de los grandes: el precio de la supervivencia política

Puede sorprender entonces que en esta tierra abierta a tantas influencias, donde los caminos para llegar a la dirigencia municipal se han renovado y multiplicado, siga siendo gente perteneciente a la misma categoría social la que los recorre. Aún hoy, el origen rural, ejidatario o ranchero, es un denominador común de esta pequeña sociedad de la cabecera. Pero los altamirenses han mostrado una notable capacidad de adaptación, afiliándose a las estructuras gremial-políticas cuando éstas se afianzaban en el ámbito regional o nacional, y logrando así retener en sus manos el control político.

En 1947, el quiebre del monopolio del grupo campesino hizo patente el proceso de diferenciación aún incipiente que el desarrollo de las actividades tradicionales de Altamira estaba propiciando. Al iniciarse los años cincuenta: ejidatarios y jornaleros, vaqueros y pequeños rancheros, salineros y cargueros predominaban en el municipio. Pero los más exitosos establecían y fundaban empresas familiares de transporte, comercio o reparaciones mecánicas en Villa Altamira, en Lomas del Real, en Cuauhtémoc. Sin romper con sus orígenes ni con sus actividades agropecuarias, reiteraban la tradición artesanal y comercial y los valores ciudadanos de Altamira, donde la instrucción ocupaba lugar importante. Acudían maestros a impartir educación primaria y secundaria; en 1950 más de la mitad de la población sabía leer y escribir, y algunas familias mandaban a sus hijos a la universidad (Meade, 1977:18).

El grupo agrario que tomó las riendas de la conducción municipal supo ampliar su horizonte político a la vez que diversificar sus actividades, y se ha aliado con las fuerzas económicas y sindicales conforme se instalaban en el municipio.

El primer contingente importante de personas ajenas al municipio —varios cientos— fueron los trabajadores de Pemex encargados de perforar y explotar los campos Tamaulipas y Constitución. A pesar de su impacto demográfico en una cabecera pequeña (a mediados de 1950 contaba con unos 1 500 habitantes a los que habría que sumar el millar de personas que vivían en el ejido Altamira contiguo), mostraron poco interés por los asuntos locales. Alojados en campamentos y luego en su propia colonia, vivían en Altamira —y en buena medida, siguen viviendo— como en un enclave ligado a su lugar y sección sindical de origen: la Sección 3 del sindicato de trabajadores petroleros de Ébano, San Luis Potosí.

Sin embargo, la presencia de Pemex impulsó a la economía local al favorecer las actividades comerciales y, de manera notable, la prestación de servicios de transporte de material para la perforación de los pozos. Fue necesario adquirir numerosos camiones de volteo al ampliarse la brecha del Chocolate y abrir un paso directo de la zona de pozos al mar para surtirla de agua salada. Se funda entonces la Unión de Camioneros, que cobra mayor importancia con el auge algodonero (años sesenta) cuando la ampliación de la frontera agrícola requiere la apertura de nuevas brechas para los desmontes y el acarreo de material de construcción.

El monopolio del transporte de productos agrícolas no elaborados es reclamado por otro sindicato que se radica en Estación Cuauhtémoc. En ese poblado, donde existe ya el Sindicato de Jornaleros Agrícolas, se establece también el nuevo Sindicato de Albañiles. Su creación responde a la voluntad de tomar su parte en una división territorial fundada en la competencia económica y en pleitos intersindicales en la Federación de Sindicatos del Sur de Tamaulipas. La exclusividad de los contratos de construcción se reparte así en tres tramos: Tampico-Altamira, Altamira-Cuauhtémoc, Cuauhtémoc-límites con el municipio de González.

Todos estos sindicatos, sin ser propiamente “obreros”, se afilian a la Confederación de Trabajadores de México (CTM). La influencia de los líderes de Tampico y Ciudad Madero, en particular la de Elías Piña, invade y sustenta la naciente estructura sindical de Altamira e involucra la vida local en una nueva dinámica. Sus representantes se forman en la negociación económica y en la política por los conflictos que los oponen entre sí o con los empresarios locales. La militancia sindical llega a convertirse en medio de ascenso social.

La instancia municipal cobra nuevas funciones al otorgar concesio-

nes de explotación de bancos de material¹⁵ o de pequeñas obras públicas, al aprobar las rutas que establecen los dos, y luego tres, sindicatos locales de transporte de pasajeros, etc. La proliferación sindical, con su afán de crear nuevos monopolios, le resulta beneficiosa en tanto le ofrece mayores oportunidades como mediadoras en las pugnas por la exclusividad territorial. Pero este posible papel de árbitro local queda supeditado al respaldo que le otorgue el poder sindical cupular. Bajo la tutela de la CTM, el sector obrero se afianza en el control del municipio de Altamira conforme el avance del corredor industrial incentiva las actividades de sus agremiados, y sus candidatos alternan con los del sector popular del PRI en los años setenta.

En este marco institucional, el personal político se sigue reclutando en una sociedad local que todavía conserva mucha homogeneidad con su doble arraigo rural y urbano. De 1970 a 1980, la composición de la PEA municipal cambia en detrimento del sector agrícola, que pasa de 61 a 29%, para beneficio del sector terciario que sube de 19 a 46%. El incremento del sector industrial es menor, de 19 a 24% (IX y X Censos de Población y Vivienda).

El espectro de la contienda se ampliará lentamente con la presencia de nuevos grupos sociales ligados al desarrollo industrial. Junto con las grandes fábricas, se establecen en Altamira las secciones correspondientes del Sindicato de Trabajadores de la Industria Petroquímica. Pero este gigante negocia directamente con cada empresario o en escala nacional, y no pone interés en los asuntos municipales. Los trabajadores especializados vienen generalmente de fuera y radican en Tampico o Ciudad Madero, de preferencia a Altamira.

Distinta es la situación y la actitud de los obreros y empleados electricistas que empiezan en 1976 a operar la gran termoeléctrica ubicada en Estación Colonias, a unos 15 km al noroeste de Ciudad Altamira. En la cabecera se les construye el Fraccionamiento Electricistas, de tenencia privada, dotado de agua y luz, a un lado del centro y allí se establecen con sus familias. Parte del personal se reclutó entre la población local, lo que estrecha los vínculos y da mayor peso a la Sección 11 del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM).

La termoeléctrica emplea de manera permanente a 900 trabajadores en un municipio cuya población económicamente activa suma 7 635 personas en 1970. La representación sindical quiere ver su importancia tra-

¹⁵ En Altamira hay numerosos bancos de arena y de grava —como el “Champayán”— que se utilizan para obras de terracería.

ducida en responsabilidades territoriales y presenta un candidato, de origen local, a la presidencia municipal en 1977.

El contexto político de estas elecciones, marcadas por una fuerte oposición del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) conduce al gobernador (Enrique Cárdenas González) a desconocer los resultados e imponer una Junta de Administración Civil dirigida por uno de sus allegados, ajeno a Altamira (1978-1980). Esta intervención cobra resonancia política extralocal si se la relaciona con la gran pugna que se desata entonces entre el Sindicato de Petroleros —cuya punta de lanza es la Sección Uno, encabezada por Joaquín Hernández Galicia en su baluarte de Ciudad Madero— y la cúpula nacional de la CTM; en el plano nacional, está en juego la dirigencia de la central obrera, y en las zonas petroleras, particularmente en el estado de Tamaulipas, la capacidad del líder de imponer a su gente en los puestos de mando. El desarrollo industrial en el municipio de Altamira convierte a su ayuntamiento en un nuevo objeto de competencia entre ambas fuerzas o quizás, más exacta y modestamente, en uno de los terrenos en que se miden.

Cuando el candidato anteriormente desechado vuelve a elegirse a finales de 1980, se beneficia con el cambio de gobernador (entra Emilio Martínez Manautou) y con un reacomodo del sindicalismo regional que le permite abandonar la Federación Regional del Sur de Tamaulipas, en proceso de disolución, y fundar la Federación Local de la CTM, bajo los auspicios del titular de ésta, Fidel Velázquez. El apoyo directo del líder nacional (hasta hoy reiterado) respalda al sector obrero altamirense en su propósito de sacudir la tutela de Tampico y de distanciarse de un Diego Navarro entonces aliado con los petroleros.

En un espacio cada vez más codiciado a medida que se delinear los contornos del puerto industrial, la presión de los petroleros de la Sección Uno se agudiza; a falta de la presidencia municipal, siempre dispondrán de una o dos sindicaturas y de algunos puestos más en la administración municipal.

Entre los puntos delicados donde el poder local busca intervenir está el acceso al empleo gracias a la exclusividad del manejo de obras y de la contratación. Este tipo de pleitos enfrenta directamente a sindicatos y empresarios, o a sindicatos entre sí (por ejemplo, a los albañiles de los diferentes sectores geográficos, o a éstos en conjunto frente al Sindicato de Petroquímicos que quisiera obtener el encargo de las obras de ampliación en sus fábricas); pero la alcaldía puede medir su peso político al rasero de su capacidad para triangular la negociación.

El ayuntamiento también se limita a un papel de mediador en los jaloneos entre el Fondepot y los ejidatarios expropiados acerca de las compensaciones prometidas y no debidamente cumplidas. En cambio,

su autoridad está directamente en juego cuando trata de imponer a los empresarios industriales un reajuste del impuesto predial o la reparación de daños ecológicos.¹⁶ La lucha es más sorda pero cotidiana con los organismos oficiales de planeación de la conurbación y las autoridades de Tampico y Madero, siendo la ubicación del basurero de la zona conurbada un tema particularmente áspero que figurará, durante años, en la agenda de sus desacuerdos.

Pero la apuesta más crítica para el control del espacio altamirense es otra. El elemento más novedoso y políticamente volátil que "produce" el desarrollo industrial es una población súbitamente multiplicada, urgida de servicios y atención social y con recursos económicos insuficientes, dispuesta a canjear su apoyo por ayuda en la resolución de sus necesidades de supervivencia.

El equipo municipal enfrenta un verdadero reto en el terreno más íntimo de su jurisdicción, cuando fuerzas externas o de jerarquía superior intentan imponer sus soluciones: en la lógica de un cacicazgo siempre más tentacular, tratándose del sindicato petrolero, y con la racionalidad planificadora metalocal y metapolítica que caracteriza el proyecto del gobierno central para Altamira.

3. Llegó para quedarse: el colono urbano (años ochenta)

Desde finales de los años setenta ya se anunciaba, con sus peculiares rasgos, que el proceso de urbanización que se aceleraría en el decenio siguiente sería masivo, ilegal, a contracorriente de lo planeado, derramándose sobre los ejidos arrastrados por el desarrollo fabril (Miramar, Francisco I. Madero, Laguna de la Puerta y Altamira) y sobre los terrenos privados que sus propietarios lotifican ilegalmente a lo largo de la carretera.

En 1980, la Comisión de Conurbación denuncia estos procedimientos y las innumerables complicidades de particulares y funcionarios de todos los niveles de gobierno, además de la total falta de coordinación entre las secretarías de Estado que otorgan permisos en asuntos de su ramo sin preocuparse por la congruencia global de los expedientes atendidos (Comisión, 1980:25-30).

La meta de una urbanización masiva a costo reducido es, empero,

¹⁶ A mediados de los años ochenta, una emisión de gases tóxicos en la Dupont obligó a desalojar una escuela y varios habitantes del casco urbano de Miramar; los ribereños se quejan de las descargas clandestinas de residuos industriales en las aguas de las lagunas.

evidentemente ajena a la multitud de personas y corporaciones que ven, al contrario, en esta perspectiva una oportunidad de ganancias y otros beneficios no monetarios. Así, la presión de la población que sigue arribando a Tampico y la zona conurbada aún después de haberse cancelado los planes de inversión hace todavía más viable y necesaria su intermediación, ante la incapacidad de Duport de cumplir con el compromiso de ofrecer lotes urbanizados en el proyectado distrito habitacional.

El líder petrolero *la Quina* es actor principal de este proceso al favorecer y canalizar el empuje poblacional hacia el extremo sur de Altamira, que para él representa la expansión septentrional de Tampico y Ciudad Madero. Su sindicato es activo desde la publicidad dada al proyecto de puerto industrial en las regiones veracruzanas, potosinas y otras bajo su influencia, hasta la apropiación concreta de terrenos. Cuenta con un mundillo de funcionarios y leguleyos que se encargan de dar al proceso una apariencia de legalidad.

Este proceso se inicia con la compra de parcelas ejidales que recibe generalmente el aval de los dirigentes y de las asambleas ejidales, aunque posteriormente se expresan muchas denuncias por abuso de autoridad.¹⁷ Joaquín Hernández Galicia —don Joaquín, como con frecuencia lo llaman— es uno de los principales “compradores” de tierras ejidales y privadas; las distribuye entre los órganos del sindicato petrolero y éstos a su vez a los demás sindicatos obreros de Tampico y Ciudad Madero, en una fragmentación repetida de terrenos que sigue la secuencia clientelista desde el líder mayor hasta los más pequeños. Sin embargo, estos lotes tardan en ocuparse. Si la crisis no detiene la inmigración, sí entorpece la capacidad de movilización de los gremios y grandes extensiones permanecen congeladas por este acaparamiento. Mientras tanto, se infla la demanda de vivienda y el rumor público habla de tierras disponibles.

Esta presión desemboca en olas de invasión cuidadosamente planeadas y organizadas por líderes populares acreditados por sus ligas con funcionarios y políticos conocidos y... con don Joaquín. Se preparan listas de solicitantes que pagan su cuota de entrada y aportan cada domingo su contribución para garantizar su derecho a la repartición de los lots. Hasta que un día se les avisa que acudan con palas y herramientas para ir a posesionarse de los terrenos vacantes.

¹⁷ Para el ejido Miramar, véase, por ejemplo, *Debate*, núm. 7, agosto de 1984, o para el ejido Altamira el juicio que después de largas dilaciones ha encauzado la Procuraduría del Estado en contra de un fraccionador ilegal apodado “La Iguata” y cinco personas más (*El Sol de Tampico*, septiembre y octubre de 1990).

Estas invasiones, realizadas con mayor o menor violencia a lo largo de los años ochenta, van en aumento conforme se convence la población deseosa de establecerse que ése es un medio confiable, si no seguro, de conseguir dónde hacerlo.¹⁸

Allegarse las voluntades de este gran sector de pobladores entra en la lógica de expansión de los petroleros que buscan controlar los territorios que cercan las fábricas y el puerto industrial y ganar el municipio de Altamira, para completar sus bastiones en el sur tamaulipeco y la Huasteca. Para *la Quina* cobra prioridad el cumplimiento de su "Revolución Urbana Tampico-Altamira", o Plan RUTA, que busca organizar en un gran sistema solidario las clases populares y los obreros de la región para mejorar su alimentación y condiciones de alojamiento.¹⁹

En estos años de crisis, la red petrolera representa una fuerza económica y un poder político sin parangón en la región, con su original "privatización" sindical de la asistencia social.²⁰ Movilizando lealtades y relaciones clientelistas, es capaz de entusiasmar a una población menesterosa por un proyecto de mejoría en sus condiciones de vida que refuerce su dignidad social.

Las autoridades municipales vacilan entre compartir los beneficios de la distribución de tierras y de su camuflaje jurídico, rendir pleitesía al generoso benefactor y resistir a la amenaza de desplazamiento político. Los sindicatos obreros locales que dominan el ayuntamiento gozan del apoyo de la CTM nacional y del gobierno estatal, pero en esta alianza se les hace jugar el papel pasivo de muro de contención contra el avance petrolero, y no les queda sino entrar en componendas con un líder poderoso y aclamado entre los colonos.

¹⁸ De 1987 a 1989, el ayuntamiento estima que 60 000 de sus 80 000 habitantes pueblan asentamientos irregulares (Aguilar y Contreras, 1989:21) y la oficina de Obras Públicas calcula hoy que 90% de las colonias están en esta situación. Si la proporción parece un poco alta, señalamos que el Censo de 1990 reconoce 82 585 habitantes al municipio, de los cuales 32 890 viven en una nueva entidad territorial, Miramar, que engloba al antiguo ejido del mismo nombre y a los de Francisco I. Madero y Laguna de la Puerta (los tres juntos sumaban 5 743 habitantes, según el censo efectuado por la SSA en 1979). Ciudad Altamira, el otro polo aglutinador de colonias irregulares, alcanza ahora la cifra de 24 122, cuando eran 8 829 habitantes en 1979 (Comisión, 1980:10). De las 15 000 familias en trámites ante la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), 5 000 ya recibieron el certificado de inafectabilidad de su lote de manos del presidente de la República el 3 de agosto de 1991.

¹⁹ Las acciones emprendidas son múltiples. Incluyen desde los donativos del sindicato para la apertura de calles y otras obras al fomento de huertos familiares o a la "invitación" a trabajar gratuitamente en las granjas sindicales para surtir las tiendas de consumo abiertas a toda la población.

²⁰ Según una expresión de V. Brachet-Márquez.

Tratar con las colonias populares

Para Altamira, 1989 es una fecha clave, significativa de cambios para la nación; con los primeros días del año se inicia aquí una profunda redefinición del equilibrio de las fuerzas que inciden en el poder local.

La eliminación de Joaquín Hernández Galicia, que sigue de cerca el acceso a la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, crea en la región un repentino vacío de poder que las autoridades de Altamira no pueden aprovechar de inmediato, pero que abre un campo nuevo para la selección interna y la campaña electoral del candidato oficial al ayuntamiento. Éste, licenciado en leyes y maestro, pertenece a la CTM,²¹ pero es entre los colonos donde tendrá que ganarse el respaldo popular, mientras el sector ejidal permanece callado, debilitado por el retiro petrolero.²²

En las colonias reina el mayor desconcierto. Aunque muchísimos líderes son apresados o perseguidos, una invasión ya programada se lleva a cabo el día siguiente a la caída de *la Quina*.²³ Los colonos se sienten desamparados y temerosos de un desalojo. Sin embargo, la estructura del liderazgo popular sigue siendo necesaria para el poder oficial, y aparece más redituable —sobre todo en vísperas de elecciones municipales y legislativas locales— permitir a los líderes menores salir bajo fianza a cambio de que se disciplinen.

La habilidad de los nuevos dirigentes consiste en ofrecer a los poseedores de los lotes invadidos la oportunidad de legalizar su situación. Esto valida *a posteriori* los actos cometidos, absuelve a los personajes importantes o marginales que mediaron en el proceso, y encausa la movilización popular en los programas del gobierno de Tamaulipas.

En acciones precursoras del futuro Programa Nacional de Solidaridad, se canalizan sumas importantes para electrificar, introducir agua, construir aulas, salones de actos, banquetas, organizar cursos de costura, etc., por medio del Programa Voluntad y Trabajo (V y T) en el que el gobierno aporta 50% del costo y la población la otra parte, en dinero o en mano de obra. Para las obras importantes, Banobras reduce a 20% la suma que los habitantes deben aportar inicialmente, con el compromiso

²¹ A esta central está afiliado, en Altamira, el Sindicato de Trabajadores de Escuelas Particulares.

²² Los apoyos y desafectos políticos no se reflejarán en toda su magnitud en los resultados electorales. Los nuevos colonos siguen ausentes del padrón (25 000 empadronados en 1989, cuando el Censo da cuenta de 82 000 habitantes en 1990), con 70% de los votos, el PRI se mantiene inalterado comparado con las elecciones municipales de 1986, y el PARM acrecienta ligeramente su audiencia pasando de 25 a 27 por ciento (López, 1991). Véase al respecto el artículo de A. Alvarado y N. Minello en este número.

²³ En la colonia El Jazmín, el 11 de enero de 1989.

de que el 30% adelantado se reembolsará en abonos en dos años.

La acción colectiva se organiza desde cada colonia y lleva la demanda, reiteradamente, ante el encargado del programa en Ciudad Victoria, el ayuntamiento y las dependencias técnicas que proporcionarán el servicio. Todo esto requiere de un líder —o mejor una lideresa— que viva en la colonia y comparta las condiciones de sus vecinos, con quienes está en trato cotidiano. Anima y en ocasiones presiona a la gente, percibe las cuotas y realiza los trámites en un frecuente ir y venir entre la capital del estado, la cabecera municipal y su colonia.

El perfil del líder o lideresa ha perdido algo de su carácter encubierto e impositivo, relacionado con un “padrino” temido, y gana fuerza en tanto se muestra buen(a) gestor(a) y goza del reconocimiento oficial. Ahora llamados presidentes de colonias, respaldados por un secretario y un tesorero y acreditados con una tarjeta de la Junta Municipal de Mejoras, entran en un juego sutil con su colonia y con las autoridades. El arraigo entre su gente y el dominio reconocido de su colonia proporcionan al líder el respaldo personal que hace valer ante sus interlocutores oficiales para presionarlos y obligarlos a cumplir con sus promesas. Pero, a cambio, se espera de él que aporte apoyo en los actos públicos, tranquilidad social y votos en las elecciones.

La mayor parte de los líderes pertenece a alguna de las dos uniones de colonos que coexisten con oficial cordialidad después de la escisión en la Unión de Colonias Populares del estado de Tamaulipas, que dio origen a la Organización de Colonias Urbanas en 1983. Ahora que la pertenencia a la red petrolera ha dejado de ser el parteaguas político, esta división ha perdido mucho de su funcionalidad pero el respeto a los cotos ganados es contraparte necesaria al establecimiento de las nuevas reglas del juego. Es más difícil el trato con dirigentes que gozan de apoyos externos al sistema gremial-partidista local, como la iglesia católica, las iglesias protestantes o los personajes influyentes de la región, y sin que haya guerra declarada, se intenta suplantar o integrar cada vez que se pone en marcha un nuevo programa oficial.

El programa se ha impuesto como instrumento principal de la presencia y la acción del ayuntamiento en colonias y ejidos. Los fondos provienen del gobierno del estado y originalmente del Comité de Planeación y Desarrollo (Coplades), las decisiones se toman en Ciudad Victoria y allí tienen que acudir los representantes de los pobladores. Este dispositivo afirma la imagen del gobernador, en un estado en que el peso de la Federación y los cacicazgos locales habían minado su poder. Al apoyarse en la presidencia municipal, el gobernador le otorga un papel de relevo e incluso, un poder real de negociación con los pobladores de su jurisdicción.

En el curso de los largos trámites necesarios para solicitar obras y llevarlas a cabo, debe obtenerse el visto bueno técnico y el aval político en las oficinas del municipio. Aunque un tanto marginal, esta intervención otorga un carácter sistemático y de cobertura mayor a las acciones puntuales que el ayuntamiento realiza con presupuesto propio (aquí una pileta, allá un camión de grava), y a las pequeñas sumas que el presidente municipal puede aportar para completar la contribución de los habitantes en el marco de V y T y acelerar las obras.

En esta alianza recién concluida entre los pequeños líderes ex petroleros rehabilitados, la instancia municipal y el gobierno del estado, y que se afianza en V y T, el ofrecimiento que en agosto de 1990 hace el presidente de la República de canalizar el Pronasol hacia el municipio es acogido con recelo. Se percibe el requerimiento de formar nuevos comités de barrios, elegidos democráticamente y no partidarios, como una amenaza de desestabilización (“causaría mucho revuelo en las colonias”, nos explica un funcionario municipal) y justifica el atraso de la convocatoria para formar estos comités (apenas en enero de 1991). Se les dan facilidades a los presidentes de las Juntas de Mejoras para que sumen su función a la del Comité de Solidaridad allí donde tienen suficiente apoyo popular para ganar estas “elecciones”. Cuando surgen nuevos representantes, su función se limita a “organizar a la gente” pues no hay aún fondos que utilizar (agosto de 1991) aparte del programa Escuela Digna, mientras siguen fluyendo los fondos V y T.²⁴

En los ejidos donde se presenta menos este delicado problema de equilibrio de fuerzas, es el comisariado ejidal el que propone a un presidente para el comité del Pronasol. Así se explica la facilidad con que se constituyeron 27 comités en los ejidos (sobre 30 en la zona agropastoral), y 110 en la totalidad de las escuelas donde el director convocó a maestros, trabajadores y padres de familia. En contraste, en julio de 1991 sólo se habían formado 29 comités en 70 colonias urbanas.²⁵

La introducción de servicios tiene como requisito la regularización de la tenencia aúnque, de hecho, ambas se manejan simultáneamente para abrir cauce tanto a las ansias de la población como a las acciones del gobierno. Para apurar el proceso de legalización y volver a darle credibilidad (la oficina federal encargada de esta función en la zona estaba comprometida en múltiples irregularidades), se nombra una coordinadora entre

²⁴ Un año más tarde, informes periodísticos informan que obras mayores, como la electrificación de las 17 colonias de la Nueva Tampico, se concluyeron gracias a las aportaciones de Solidaridad. Sin embargo, se trata de obras que ya tenían un alto grado de avance con V y T (*El Sol de Tampico*, 3-VII-92).

²⁵ Entrevista con el representante municipal del Pronasol.

las secretarías de la Reforma Agraria y de Asentamientos Humanos, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) y la oficina estatal de Sipoblador,²⁶ presidida por el gobernador.

Al canalizar hacia el gobierno estatal los trámites para obtener los servicios urbanos y la seguridad de la tenencia, se refuerza al municipio como doble instancia de intermediación. La forzosa intervención del presidente municipal en los procesos jurídico y técnico le da instrumentos para consolidar su esquema de poder en el ámbito urbano, donde la estructura municipal se extiende hasta las colonias mediante los líderes integrados en el Comité Municipal de Juntas de Mejoras, articulado a su vez, de un lado, a la Oficina de Obras Públicas y, del otro, a la red partidaria, por la pertenencia de ambas uniones de colonos a la UNE (nuevo nombre del sector popular del PRI).

En esta cadena político-administrativa, los puestos de mando municipales siguen reservados para la pequeña élite local que busca reforzarse, frente a interlocutores externos mayores, con un discurso de integración de las nuevas colonias populares en la sociedad local. Los programas del gobierno estatal, y que el municipio se enorgullece de llevar a cabo, alimentan la esperanza de los colonos de verse reconocidos algún día como "altamirenses mexicanos".

Conclusión: identidad local, poder municipal

En este municipio donde la población desplazada o foránea tiene fuerte predominio, el arraigo se revela como un valor compartido. A él se acude en defensa de un espacio de autonomía amenazado por los grandes actores del desarrollo regional, cuando la pequeña burguesía local se niega a que Altamira sea tratada como "el basurero de la conurbación". También es impulso para quienes esperan haber encontrado, al fin, un lugar donde fincar e iniciar un patrimonio para sus hijos. En Altamira, la identidad local no es rasgo inherente ni seguridad ganada, sino motivo de esfuerzos conscientes.

La habilidad del equipo municipal consiste en enarbolar estos reclamos y, con un primer gesto de respaldo, confortarlos, encaminarlos, frente a otras fuerzas o autoridades. Para su población, en particular para la más reciente, la más pobre, la más combativa, y para sí misma como entidad, Altamira reivindica un lugar específico en el fortalecimiento industrial y en la expansión urbana, y rechaza un desarrollo que sólo

²⁶ Sipoblador se encarga de regularizar lotes urbanos en predios originalmente privados, mientras la Corett hace lo propio en terrenos ejidales.

tome en cuenta los intereses de las empresas, de los grandes sindicatos, de la planeación macrorregional.

En su propio nombre, el cabildo negocia y obtiene de la Federación y del gobierno del estado su parte de los impuestos generados por el comercio exterior en el puerto industrial y exige un mayor impuesto predial a las industrias. Eleva la voz en representación de sus ciudadanos cuando el nuevo libramiento que circunda Tampico bloquea el acceso a algunas colonias, cuando los petroquímicos pretenden ganar a los albañiles locales la construcción de nuevos locales fabriles, cuando la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología no autoriza la dotación de servicios en colonias asentadas sobre la telaraña subterránea de ductos de Pemex u otras zonas declaradas no urbanizables.

Asume la identidad del pobre, la bandera del que lucha por no dejarse ahogar por los grandes procesos económicos y ganarse en ellos un lugar. En esta defensa, los viejos altamirenses y los nuevos colonos convergen y el municipio hace de su debilidad virtud. Unos y otros ganan en esta alianza. A los colonos se les ayuda a regularizar su tenencia, se les apoya en la demanda de servicios públicos, sean "urbanizables" o no los terrenos, y aunque se favorece una ocupación más densa de los asentamientos existentes, no se les impide crear otros nuevos, de preferencia en los alrededores de la cabecera. Ésta encuentra la oportunidad de desarrollarse, independientemente de Tampico, con una población adicional que estimula el comercio, los transportes, la construcción, y justifica más planteles educativos y equipamiento deportivo. Si los capitales locales no tienen la talla suficiente para realizar operaciones de maquila para la industria petroquímica, pueden en cambio aprovechar un crecimiento urbano a su alcance, y entre la población de viejo cuño sólo se perciben sentimientos positivos hacia esos nuevos vecinos cuya clientela se trata de ganar.

Esta actitud, y la actuación del gobierno municipal, responden a una situación distinta de la que produjo las invasiones de los años ochenta. Los líderes insertos en la red petrolera eran entonces los únicos capaces de dar acceso a un predio a quienes aspiraban a salir de los cuartos exigüos y caros que rentaban en Tampico, conseguir una vivienda propia y acercarse a potenciales fuentes de empleo. Ya asentada esta población, sus prioridades son otras: asegurar la posesión con un título, construir, obtener los servicios básicos. Después de la remoción de *la Quina*, son los organismos técnicos y las autoridades reconocidas los que pueden dar una respuesta. El poder tutelar ahora se reviste de legalidad.

Sin abandonar las relaciones clientelistas, se les oficializa dentro de una configuración territorial que se aparta del molde sindical. Encauzadas en una estructura administrativa, presentan además la ventaja de es-

trechar los lazos del municipio con el gobierno del estado. La operación masiva del programa V y T es un elemento clave que da credibilidad a las promesas municipales y resonancia política a los afanes descentralizadores del poder estatal. En este cuadro, la intervención del Pronasol se considera inicialmente como un riesgo para el control de una acción ciudadana a la que se abren nuevos canales, y para el delicado equilibrio logrado entre los distintos niveles de gobierno. De hecho, a la vez que ofrece una oportunidad de renovar fuentes de financiamiento y de respaldo, el Pronasol amenaza con anular, en aras de una mayor eficacia política, la fugaz autonomía que se había ganado el ayuntamiento.²⁷

El último periodo municipal ha marcado un desplazamiento de ciertas alianzas en el orden interno. La desaparición de la alternativa petrolera parece haber desactivado el interés del cabildo por su amplio territorio rural. Frente a los 60 000 habitantes concentrados en un precario tejido urbano donde la explosividad social reclamaba los mayores esfuerzos de conciliación y liderazgo, los vecinos de los poblados rurales aparecen dispersos, oscilantes entre la producción, el mercado de trabajo jornalero y la eventualidad de un empleo de albañil. Las relaciones son tensas con la Unión de Ejidos, cuya dirigencia logró preservar cierta autonomía sin mucha capacidad de convocatoria, pero el control político formal que el ayuntamiento conserva en la mayoría de los ejidos permite atender algunas necesidades "urbanas" de la población campesina. No aflora una gran preocupación por la dinámica económica actual del campo o por sus próximos rumbos, a pesar del evidente interés que presenta su potencialidad agrícola y la novedosa "liberación" jurídica de las tierras ejidales para nuevos inversionistas nacionales y extranjeros.

Las evoluciones económicas y los acontecimientos políticos se conjugan para profundizar la tendencia a la segmentación del territorio y la población altamirenses.

El espacio político municipal es, hoy por hoy, urbano-popular. En el ámbito así recortado, el ayuntamiento ha ganado un poder más operacional sobre su territorio pero se ve enfrentado al problema económico crucial del desempleo local y a los riesgos ecológicos que corre la población asentada sobre terrenos inundables, entre fábricas muy contaminantes. Estos procesos tienen por actores principales a grandes empresas, organismos estatales, fuerzas sindicales y políticas poco dispuestas a aceptar de buen grado una injerencia de la instancia municipal.

²⁷ Para matizar esta afirmación, recordemos que el presidente municipal sigue recurriendo al tradicional protector Fidel Velázquez y a la Lotería Nacional para un gran proyecto de drenaje (*El Sol de Tampico*, 4-VII-92).

En el nido del gorrión altamirense, no han nacido aún todos los huevos del cuclillo.²⁸

Recibido en febrero de 1992

Revisado en junio de 1992

Correspondencia: Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)/Centre de Recherche et Documentation sur l'Amérique Latine (CREDAL) 28, Rue Saint Guillaume, 75007, Paris; El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos, Camino al Ajusco 20, Col. Pedregal de Santa Teresa, 10740 México, D.F.

Bibliografía

- Abelés, Marc (1986), "L'État en perspective", en *Études rurales*, núm. 101-102, París.
- Aguilar León, Juan, y Óscar Contreras Nava (1989), *Altamira, un bastión en el sur de Tamaulipas*, H. Ayuntamiento de Altamira, 1987-1989.
- Alvarado, Arturo (1988), *El portesgilismo en Tamaulipas, 1924-1932. Estado y región en el México contemporáneo*, México, El Colegio de México, 1993.
- Colectivo (1967), *La economía del estado de Tamaulipas*, "Colección de Estudios Económicos Regionales", México, Sistema Bancos de Comercio.
- Comisión de Conurbación (1980), *Plan de ordenamiento de la zona conurbada de la desembocadura del río Pánuco*, versión abreviada, con mapas.
- _____ (1982), *Plan parcial de desarrollo urbano de Ciudad Altamira*.
- Fourt, Gilles (1983), "Migrations et emploi dans le port industriel de Tampico-Altamira", en *Documents de Recherche du CREDAL*, núm. 18, París, CREDAL/IHEAL.
- Gaudin, Jean-Pierre (1986), "Pouvoirs locaux et territoires. Une approche des espaces politiques", *Études rurales*, núm. 101-102, París.
- González Salas, Carlos (1980), *Los seis municipios conurbados de la desembocadura del río Pánuco*, Ciudad Victoria, Universidad Autónoma de Tamaulipas.
- Lavín Higuera, Valentín (1983), *La industrialización de Tamaulipas*, Ciudad Victoria, Ediciones Culturales Mexicanas/Universidad Autónoma de Tamaulipas.
- López Aceves, Juan Carlos (1991), *Procesos electorales en Tamaulipas (1979-1989)*, Ciudad Victoria.

²⁸ Muchos cuclillos acostumbra depositar un huevo en el nido de aves de otras especies para que lo empollen. El polluelo, fuerte y de rápido crecimiento, consume todo el alimento, por lo que las demás crías mueren de inanición.

- Meade, Joaquín (1977), *La Huasteca tamaulipeca*, México, Jus, 3 tomos.
- Nunes, Edison (1991), "Introducción", en Varios Autores, *Municipio y democracia. Gobiernos locales en ciudades intermedias de América Latina*, Santiago de Chile, Ediciones SUR.
- Pepin-Lehalleur, Marielle (1990), "Itinéraire d'approche a quatre terrains d'enquête et propositions pour un questionnement d'équipe", Pour l'étude du pouvoir local dans le golfe du Mexique, *Documents de Recherche du CREDAL*, núm. 78, París.
- (1986), "Algunos parámetros de la lucha por el poder en la región del Mante, Tam.", en J. Padua y A. Vanneph (eds.), *Poder local y poder regional*, México, El Colegio de México/CEMCA/CREDAL.
- Pérez Sánchez, Ángel (1990), *Raíces tamaulipecas del municipio de González*, Ciudad Victoria, Universidad Autónoma de Tamaulipas.
- Pérez, Pedro (1991), "Gobierno local en capitales provinciales en Argentina: las casas de resistencia y la Rioja", en Varios Autores, *Municipio y democracia. Gobiernos locales en ciudades intermedias de América Latina*, Santiago de Chile, Ediciones SUR.
- Portes Gil, Emilio (1972), *Raigambre de la revolución en Tamaulipas. Autobiografía en acción*, México, Lito Offset Fersa.
- Prévôt-Schapira, Marie-France (1989), "Mexique: apres les élections, la chute d'un cacique syndical", en *Problèmes d'Amérique Latine*, Paris, La Documentation Française
- (1990), "Société locale et corporatisme dans la région de Tampico-Ciudad Madero", *Documents de Recherche du CREDAL*, núm. 78, París.
- Prieto, Alejandro (1975), *Historia, geografía y estadística del estado de Tamaulipas*, reproducción facsimilar de la edición de 1873, México, Manuel Porrúa.
- Reyes Vayssade, Martín, *et al.* (1990), *Cartografía histórica de Tamaulipas*, Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco de Cultura.
- Rinaudo, Ives (1986), "Un équilibre méditerranéen: le pouvoir local entre l'État et le territoire", en *Études rurales*, núm. 101-102, París.
- Romer, Marta (1986), "Los flujos migratorios laborales desde la Huasteca indígena", en François Lartigue (coord.), *Trabajo y trabajadores en la Huasteca indígena*, México, CIESAS.
- Salinas Domínguez, Carlos (1986), *La esquina del poder*, Ciudad Victoria, Talleres FOC.
- Sánchez, María del Pilar (1990), "Cartografía de Tampico", en Reyes Vayssade M. *et al.*, *Cartografía histórica de Tamaulipas*, Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco de Cultura.
- Secretaría de Programación y Presupuesto (1986), *Monografía de Altamira*, Ciudad Victoria.
- (1940 a 1990), VI al XI *Censos Generales de Población y Vivienda*, México.
- Ziccardi, Alicia (coord.) (1991), *Ciudades y gobiernos locales en la América Latina de los noventa*, México, Instituto Mora/M.A. Porrúa/Flacso.

Fuentes periódicas

Agromundo, órgano informativo oficial del Patronato para la Investigación Agrícola del Sur de Tamaulipas (PIAST), revista mensual, Tampico.

Debate, revista mensual con información regional, Tampico.

El Sol de Tampico, diario.

Mundo Ganadero, órgano informativo oficial del Patronato para la Investigación Ganadera de las Huastecas, revista mensual, Tampico.

Notieconomía, órgano informativo del desarrollo regional de la zona conurbada del río Pánuco, revista mensual, Tampico.

